

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A fs.215 comparecen don VICTOR MANUEL ULLOA ZAMBRANO, dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores; doña CLAUDIA PAZ FACHINETTI FARFÁN, abogada, Secretaria General de la Asociación Nacional de Funcionarios de la CAJRM, ambos con domicilio en Amunátegui N°471, oficina D, Santiago; RAÚL ALFREDO LETELIER RUBIO, tesorero; MAURICIO RICARDO VARGAS MUÑOZ, Director; SERGIO AGUSTÍN MARÍN GAVILÁN, Director, los tres, dirigentes del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores de Montaje Industrial, Construcción, Actividades Afines y Ramos Conexos y domiciliados en San Antonio N°378, oficina 605, Santiago; NANCY DEL CARMEN RETAMAL NIÑO y CARMEN GLORIA RIVERA ALBORNOZ, Presidenta y Secretaria, respectivamente, del Sindicato Interempresas Manipuladoras de Alimentos Provincia Cordillera, ambas con domicilio en Las Bodegas N°0806, Puente Alto; ROBERTO ALEJANDRO ARAVENA SEPÚLVEDA, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Provincial Valparaíso, domiciliado en Freire N°360, departamento 1, Valparaíso; MARTA DEL PILAR LATORRE CONTRERAS, Tesorera de la Asociación de Funcionarios de CajBioBio, con domicilio en Freire N°864, Concepción; ROSANA GISELE VALENZUELA OSORES, Secretaria General de la Federación Central de Manipuladoras de Alimentos, con domicilio en Avenida Dorsal N°1751, Conchalí; quienes interpusieron reclamación con motivo del proceso eleccionario de renovación total del Consejo Directivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, cuya votación tuvo lugar el 30 de mayo de 2017.

Dirigen la reclamación en contra de la citada organización sindical, representada por doña BÁRBARA CATHERINE FIGUEROA SANDOVAL, profesora, y contra el Colegio Electoral Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, representado por HOLANDA VIDAL CABALLERO, MARCIA MALDONADO CORTÉS y FABIOLA YANQUEZ VIDAL, en sus calidades de Presidenta, Secretaria y Vicepresidenta; todos los reclamados domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1346, Santiago.

Fundando la reclamación, expusieron que en sentencia ejecutoriada pronunciada por este Tribunal Electoral, en causas acumuladas Roles N°4579/2016 y N°4580/2016, se declaró nula la elección efectuada el 25 de agosto de 2016 en la Central Unitaria de Trabajadores y se dispuso que la organización sindical procediera a realizar un nuevo acto eleccionario, con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias que le sean aplicables.

Señalan que en el 11° Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, realizado los días 27 y 28 de enero de 2017 se acordó, según citan de los reclamantes, "...realizar nuevas elecciones que no excedan del mes de abril del presente, con el fin de subsanar las dificultades que tuvieron las de agosto del año

pasado. Estas elecciones serán con los nuevos estatutos y de manera única se llevarán a cabo con el sistema de voto ponderado.”

Las elecciones, que se llevaron a cabo el 30 de mayo de 2017, se regirían por los estatutos aprobados en ese acto, lo que no se cumplió, hecho que constituye un primer vicio del acto eleccionario, toda vez que la convocatoria no se ajustó a lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del artículo 40 del estatuto aprobado por el 11° Congreso Nacional, que disponen que en la misma convocatoria que debe efectuar el Directorio Nacional para elegir a sus miembros, se convocará a la elección de los Consejeros Territoriales de la Central Unitaria de Trabajadores y que la votación para elegir a los miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) y de los Consejos Territoriales, se llevará a efecto en una misma fecha, en todo el país, con una anterioridad no mayor de 60 días corridos ni menor de 30 días corridos de la fecha de expiración del mandato del CDN saliente.

Explican que la convocatoria para la elección se realizó mediante comunicado del Colegio Electoral, en forma posterior al día 11 de mayo de 2017. Agregan que el 12 de mayo de 2017, la Presidenta y el Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, emitieron un comunicado a raíz del fallo de este Tribunal Electoral, en que se dice que en los siguientes días se reuniría el Colegio Electoral para fijar la fecha definitiva de la elección. Seguidamente, señalan que la falta de publicidad incidió en la abstención y que en este proceso hubo 1.349 asociados habilitados para votar que no lo hicieron, votando menos del 50% de los electores, lo que constituiría un segundo vicio del acto eleccionario, desde que no se respetaron los plazos fijados por la propia organización.

Refieren que los estatutos aprobados por el 11° Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, fueron depositados en la Dirección del Trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 282 del Código del Ramo, aceptando la organización someterse al procedimiento allí establecido, que considera la posibilidad de formular observaciones, por lo que es inadmisibile que la Central Unitaria de Trabajadores actúe contra sus propios actos y no acepte los resultados de dichas observaciones, formuladas por la Dirección del Trabajo, mediante Ordinario N°1537 de 6 de abril de 2017, el que fue respondido por la Central Sindical el 22 de mayo de 2017, aceptando nuevamente con ello la observancia del artículo 282 antes citado, para la aprobación de sus estatutos.

Aseguran que, hasta la fecha de presentación del reclamo, la Dirección del Trabajo no se ha pronunciado respecto de la legalidad de la versión estatutaria corregida presentada por la Central Unitaria de Trabajadores el 22 de mayo de 2017. Agregan que existe una solicitud presentada por un grupo de dirigentes asistentes al 11° Congreso Nacional, por la que piden un pronunciamiento de esa Dirección respecto a observaciones a esta reforma, también pendiente de resolución. De ello, concluyen que la versión estatutaria que gobernaba los actos de la Central Unitaria

de Trabajadores y las formas de elección, es aquella que se regula en estatuto anterior al 11° Congreso Nacional y refieren que la importancia de esta diferencia de gobierno eleccionario, radica en que en el estatuto anterior los electores sólo podían marcar dos preferencias y el posterior permite marcar 9 preferencias por elector.

Señalan que el nuevo estatuto contendría normas contradictorias, toda vez que los artículos 40 inciso décimo cuarto y 106, establecen que cada elector puede marcar hasta 9 preferencias en una o más listas que contenga la cédula, pero el artículo 119 dispone que las cédulas que señalen más de dos candidatos, se considerarán voto nulo y no serán escrutados.

Por otra parte, denuncian que la regulación de la votación está concebida bajo la modalidad material del voto y no una electrónica o virtual. Los artículos 109 y siguientes regulan expresamente las formas materiales en que ha de llevarse a cabo la elección y nada dicen respecto a la electrónica, en la que hay una sola urna virtual, las cédulas son electrónicas, no hay firma en cuaderno de firmas que confrontar con el número de talones que se debe cortar de la cédula. Todo ello, es de vital importancia, aseguran, pues se desconoce por los apoderados de listas, candidatos y electores, cuántos concurren a votar, a quiénes representan y cuál es el valor del voto de los electores.

Refieren que los artículos 40, inciso 12° y 90 de los estatutos precisan quiénes componen el cuerpo de electores: todos los dirigentes de los sindicatos base o nacionales, los dirigentes de las asociaciones base, debidamente afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores, ya sea a través de sus federaciones o confederaciones o directamente, que se encuentren vigentes en su cargo y al día en el pago de cotizaciones con una anticipación de 90 días. Asimismo, tienen derecho a voto los dirigentes de asociaciones nacionales, confederaciones, federaciones, asociaciones gremiales, colegios profesionales y de la misma Central Unitaria de Trabajadores, que no posean un cargo de dirigente en una organización de base que se encuentre afiliada a la misma.

El valor del voto ponderado de todos los electores está regulado en el artículo 107 de los estatutos y se determina dividiendo el número de afiliados registrados en la Central Unitaria de Trabajadores de cada organización base, por el número de dirigentes de ella con derecho a voto. En el caso de los dirigentes de Federaciones y Confederaciones que no pertenezcan a algún sindicato o asociación base, mientras mantengan su calidad de dirigente de grado superior, la ponderación de su voto tendrá valor uno (1). Esto último también se aplica a los consejeros de la Central Unitaria de Trabajadores, que no mantengan un cargo de dirigente en algún sindicato o asociación base.

Señala que las reglas que debe seguir el Colegio Electoral en la confección del padrón electoral, son las siguientes: a) Ninguna organización afiliada

podrá acreditar una cantidad de socios mayor a la cantidad resultante del promedio de las cantidades de socios por las cuales la organización ha pagado cuotas mensuales a la Central durante los 12 meses inmediatamente anteriores al cierre del padrón; b) Ningún elector podrá tener una votación ponderada superior a 500; y c) Ninguna organización puede tener más dirigentes con derecho a voto que los establecidos por el artículo 235 del Código del Trabajo con derecho a fuero.

Agregan que el padrón debe cerrarse 90 días antes de la elección; que el Colegio Electoral Nacional debe elaborar el padrón, basado en informes de la Tesorería, la Vicepresidencia de Organizaciones y la Secretaría General; y que para efectos de determinar el número definitivo de afiliados a la organización base, el Colegio Electoral debe ponderar conjuntamente lo siguiente: a) El informe del Departamento de Organizaciones; b) Los antecedentes recabados de la Dirección del Trabajo; y c) El número de afiliados cuyas cotizaciones se encuentren efectivamente pagadas.

Señalan que, si bien no se especifica cuáles son los antecedentes que deben recabarse de la Dirección del Trabajo, a su juicio, es evidente que la información recibida de los órganos internos de la Central Sindical, deben cotejarse con lo que el órgano público informe, operación que ignoran haberse realizado.

En el proceso eleccionario reclamado, el cierre del Padrón electoral fue establecido hasta el mes de febrero de 2017, es decir, 90 días antes de la elección y considerando las cotizaciones pagadas de los últimos 12 meses antes del cierre, esto es, marzo de 2016 a febrero de 2017. Sin embargo, en reclamos acumulados Rol N°4579/2016 y N°4580/2016, se denunció que organizaciones sindicales presentaban un número de afiliados abultado y que en ese proceso eleccionario el padrón se cerró en el mes de junio de 2016, de modo tal que el Padrón empleado en la elección que ahora se impugna, incluye cifras impugnadas, a las que tanto la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, como la Presidenta del Colegio Electoral Nacional, se allanaron.

A modo de ejemplo, señalan que la Confederación Ranquil, para las elecciones de agosto de 2016 -época en que se consideraba el número de socios y cuotas pagadas hasta dos meses antes de la votación-, declaró tener 24.890 socios, pagando cuotas por éstos en los meses de mayo y junio de 2016. Esta cifra, entre muchas, fue impugnada en los autos Rol N°4579/2016, y sin perjuicio de lo acreditado en autos, las demandadas se allanaron pura y simplemente a lo reclamado. Agregan que después de las fechas mencionadas, la Confederación Ranquil continuó declarando tan sólo 5.200 socios, hasta diciembre de 2016, mes en que comenzó a declarar 7.000; lo mismo en enero y febrero de 2017, fecha de cierre del Padrón. Como se considera el promedio de los últimos 12 meses (marzo de 2016 a febrero de 2017), esa organización sindical aparece con un ponderado de



8.065 socios, pues los 24.890 declarados en mayo y junio de 2016, influyeron en el cálculo.

Concluyen que conforme a la sentencia ejecutoriada recaída en causas acumuladas Rol N°4579/2018 y N°4580/2018, era necesario para este nuevo acto eleccionario, depurar previamente el padrón, lo que no se hizo, constituyéndose en un nuevo vicio que importa la nulidad de la elección.

Terminan solicitando se declare nula la elección de 30 de mayo de 2017 efectuada en la Central Unitaria de Trabajadores y se ordene la realización de una nueva elección, con costas.

A fs.276 rola escrito de contestación de las reclamadas BÁRBARA FIGUEROA SANDOVAL, HOLANDA VIDAL CABALLERO, MARCIA MALDONADO CORTÉZ Y FABIOLA YANQUEZ VIDAL, en el que solicitaron el rechazo del reclamo, con costas, y expusieron que el Consejo Nacional Ampliado de la Central Unitaria de Trabajadores sesionó los días 13 y 14 de enero de 2017 y en él se abordaron las temáticas que serían incorporadas a la reforma estatutos en el 11° Congreso Nacional de los días 27 y 28 de enero, todo ello, partir de una síntesis elaborada por una “Comisión Amplia”, integrada por el Secretario General, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Organización y un integrante de cada una de las listas postulantes a la convocatoria de elecciones de agosto de 2016. En la sesión del Consejo -y en lo pertinente a estos autos- se aprobaron propuestas emanadas de la Comisión Amplia que se plasmaron en el documento denominado “Informe sobre auto reforma sindical y reforma de estatutos”, que sirvió de base al 11° Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores.

En cuanto a los acuerdos del 11° Congreso Nacional, destacan: a) En cuanto a la forma de votación, se aprobó que a partir de las elecciones normales que corresponden al año 2020, el sistema electoral de la Central será directo y universal, es decir, los trabajadores afiliados a las organizaciones que pertenecen a la Central podrán votar directamente por los dirigentes nacionales. Se creó una comisión técnica que diseñará los mecanismos de implementación del acuerdo; b) En cuanto a la composición del Colegio Electoral, se definió que la elección de sus miembros se hará optando hasta por 5 preferencias y no por 8, como estaba establecido; c) en cuanto al reglamento electoral, que sea parte integrante de los estatutos; d) Padrones de las organizaciones afiliadas serán publicados en la página web de la Central actualizada trimestralmente, dando a conocer las organizaciones afiliadas, número de afiliados y estado de cotizaciones; e) Se establece como obligatoria la constitución de un Comité de Ética, como forma interna de control de los marcos de la libertad sindical; y f) Se incorporó un artículo transitorio para llevar adelante nuevas elecciones para el mes de abril de 2017, que busca junto a este estatuto subsanar la debilidades de la elección de agosto de 2016.

Sobre el quorum de aprobación de la reforma estatutaria, sostuvieron que dicha materia fue abordada en el 11° Congreso Nacional, acordándose aprobar la reforma de estatutos, puesto que el quorum estaba en los marcos planteados por el artículo 10 del antiguo estatuto, todo ello en un contexto de libertad y democracia sindical, criterio que se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad, en tanto la reforma fue aprobada por el 56,52% de los delegados asistentes con derecho a voto en el Congreso.

Exponen que la reforma fue depositada ante la Dirección del Trabajo el 3 de febrero de 2017, organismo que mediante Ordinario N° 1537 de 6 de abril de 2017, formuló las siguientes observaciones:

a) En cuanto al quorum de aprobación de la reforma, dispuso acreditar la interpretación realizada por la Central respecto de la norma estatutaria referida al quorum para aprobar la reforma de estatutos contenida en el artículo 10 de los estatutos vigentes al 27 de enero de 2017, acompañando las actas que dan cuenta de dicha interpretación y las certificaciones que correspondan de las mismas por parte del organismo o persona que la regulación interna establezca, concediendo al efecto el plazo de 45 días hábiles. La respuesta de la Central Unitaria de Trabajadores, de 18 de mayo de 2017 señaló que dicha aprobación (interpretativa sobre quorum de aprobación de reforma de estatutos) produjo efectos vinculantes para todos los integrantes de la Central, poniéndose en marcha de forma inmediata las instituciones en ella contenidas. Afirman que se acompañaron las Actas del Debate y Conclusión del 11° Congreso Nacional de 27 y 28 de enero de 2017; el Acta Final sobre Reforma de Estatutos, segunda jornada del 11° Congreso Nacional, de 28 de enero de 2017; el Resumen de Acuerdos del mismo Congreso; el acta de comparecencia ante la Dirección del Trabajo, del Presidente y Secretario de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional, señores Marcos Canales Huenchuan y David Acuña Millahuenque, en la que se expone en detalle el proceso seguido de discusión y aprobación del estatuto; acta de elección del Consejo Electoral Nacional; Acta de constitución de ese Consejo y certificación de documentos.

b) Observación relacionada con acreditar que el texto de la reforma de estatutos se puso en conocimiento de los asistentes y que sobre esa base surgió la discusión en asamblea, existió votación económica de los puntos incorporados y que los congresales tuvieron conocimiento previo de la reforma sometida a votación final el 27 de enero de 2017. La Central Unitaria respondió que la discusión de las materias tratadas en el 11° Congreso Nacional “es la conclusión de un proceso previo de participación y reflexión conjunta de los distintos cuerpos de la Central”; que durante el desarrollo del Congreso se expusieron en detalle los contenidos de los estatutos a los participantes, estableciéndose discusiones parciales y tomándose decisiones que definieron y dieron cuerpo al texto final; que se utilizó una minuta de contenidos de la reforma, que fue expuesta a los asistentes y al mismo tiempo,

mediante proyector, se exhibieron los textos reales de las cláusulas que se iban votando; que las modificaciones que el Congreso decidió realizar, lo fueron in situ y frente a los delegados, como las relativas a la composición de secretarías y consejos. Además, se entregó a los asistentes el Informe sobre Auto Reforma Sindical y Reforma de Estatutos.

Respecto de la denuncia formulada por los reclamantes, en cuanto sostienen que debía realizarse una elección total de la Central Unitaria de Trabajadores, señalan que existen razones de contexto para explicar por qué, pudiendo realizarse una nueva elección en todo el país, se optó por realizar primero la del Consejo Directivo Nacional.

Refieren que la Central sabía que debía realizar pronta elección, puesto que era evidente y de público conocimiento que la efectuada el 26 de agosto era irregular. Por ello se realizó un Congreso extraordinario, se modificaron los estatutos y se contrató una empresa externa para asegurar la transparencia electoral, a partir del voto electrónico. Esta urgencia -sostienen- justificó la redacción del artículo primero transitorio de los estatutos que dispone que el Congreso Nacional aprobó una elección del Consejo Directivo Nacional a desarrollarse durante el mes de abril de 2017, para cuyo efecto se eligió al Comité Electoral y que, de forma excepcional, los plazos de aplicación de los diferentes hitos del proceso electoral, serían definidos por el Consejo Directivo Nacional.

Sostienen que es evidente que lo ideal habría sido repetir la votación completa, pero que no hay elementos antijurídicos en haberlo hecho sólo del Consejo Directivo, porque así fue previsto en los propios estatutos. Agregan que el Consejo Directivo Nacional Ampliado se reuniría los días 21 y 22 de julio de 2017, con el fin de fijar la elección para los cargos de Consejeros Provinciales, Zonales y Territoriales.

Acerca de la fecha en que se realizó la convocatoria a la elección, afirman que no es efectivo que ella se realizara en fecha posterior al 11 de mayo, como alegan los reclamantes, sino que lo que existió con posterioridad a esa fecha fue un comunicado donde se deba cuenta que existían dudas acerca de si era o no conveniente reponer y apelar de la resolución que acogió la medida de suspensión, cuyo contenido era impedir el desarrollo de la elección en la fecha primitiva fijada, 20 de abril de 2017. La convocatoria habría respetado los plazos estatutarios en el entendido que la elección sí podría realizarse el 20 de abril, pero la Central optó por no reponer la resolución que impedía la elección en esa fecha.

En el comunicado -agregan-, sólo se indicó que por resolución del Tribunal Electoral no era posible realizar la elección en la fecha prevista. El Colegio Electoral sólo debía definir una fecha para el acto de votación, puesto que lo demás (fijación de padrones, pago de cuotas, forma de votación, etc.) estaba previamente definido y fue publicado correcta y oportunamente.



En relación con la vigencia de los nuevos estatutos, sostienen que ello no es materia de competencia de este Tribunal Electoral, sin perjuicio de lo cual aclaran que las irregularidades evidenciadas con motivo de la elección de 26 de agosto de 2016, obligaban a una revisión y modificación de los estatutos, a fin de evitar que la elección que debía realizarse con posterioridad, presentara las mismas dificultades, para cuyo efecto la Central propuso una serie de muy significativas reformas, siendo especialmente cuidadosa en los aspectos de forma relacionados con la convocatoria al Congreso, acreditación de los delegados asistentes y el quorum de aprobación, todo ello, conforme a lo ya descrito en la exposición de estos hechos.

Estiman que la Dirección del Trabajo no necesita otorgar resolución alguna que dé por subsanadas las observaciones formuladas, ni mucho menos una que otorgue validez a los nuevos estatutos, pues no existe ninguna disposición en el Código del Trabajo ni en la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo que obligue a ello, siendo suficiente para la validez de los estatutos y sus observaciones, el depósito de los mismos, salvo que medie acto administrativo, que hubiere apercibido de tenerlos por no aprobados, al no cumplir dentro de plazo con las observaciones formuladas. A ello agregan como antecedente, el hecho que la Dirección del Trabajo, mandatada por este Tribunal Electoral, puso a disposición de la elección de 30 de mayo de 2017, la cantidad suficiente de ministros de fe para otorgar validez a la misma.

Sobre la legalidad de la votación virtual, expusieron que la votación en el Congreso se hizo bajo esta modalidad con miras a otorgar máxima transparencia a dicho proceso y también al que se haría con posterioridad. Afirman que nunca se desconoció cuántos concurrieron a votar, a quiénes representaron y cuál fue el valor de sus votos, pues todo esto fue cuidadosamente informado. Agregan que en el evento hipotético que se desconocieran estos aspectos, ello no guardaría relación alguna con el carácter material o virtual del voto.

En relación con el abultamiento de los padrones, aseguran que existe una imposibilidad para conocer el número exacto de asociados de cada organización sindical, que radica en el concepto de autonomía, en la imposibilidad de las autoridades administrativas de llevar completo y actualizado registro y en las características de los asociados con derecho a voto, relacionadas con el pago oportuno de las cuotas. A su juicio, garantizar la autonomía de las organizaciones sindicales determina, entre otras cosas, la imposibilidad de la autoridad pública para controlar el número exacto de afiliados a un sindicato, asociación de funcionarios o colegio profesional en un momento determinado. Por tal razón la Ley N° 19.759 de 2001, privó a la Dirección del Trabajo de toda competencia en materia sindical electoral, eliminando la obligación que tenían los sindicatos base y las organizaciones de grado superior, de informar anualmente a esa repartición el



número de sus afiliados. Esta exigencia -relatan- fue eliminada, porque suponía un control que, no obstante garantizar mayores niveles de transparencia electoral, ponía en tela de juicio la autonomía sindical, otorgando información a la autoridad que bien podría ser usada para fines espurios en determinados momentos históricos. Agregan que el bien jurídico protegido es la autonomía sindical y no la transparencia electoral, porque ésta, siendo deseable, no adquiriría ribetes de derecho humano fundamental.

Estiman que aun cuando se contara con información precisa de cada afiliado a cada organización, no existiría garantía de que votaran todos los socios y/o delegados, porque para votar es necesario, además, acreditar el pago de las cuotas sociales. Señalan que no siempre las organizaciones cotizan en la Central por el número total de socios inscritos, situación que estiman no es la ideal, pero tampoco es inmoral, antiético o ilegal.

Finalmente, reconocen la existencia de una probable disminución o alzamiento del número de socios de cada sindicato, asociación o colegio profesional afiliado, pero niegan que esta realidad obedezca a una conducta reñida con la legalidad o la moralidad. Agregan que tanto para la Dirección del Trabajo, como para la Central Unitaria de Trabajadores existe una imposibilidad de saber con exactitud, cuántos socios pertenecen a cada organización y por cuántos se debe cotizar.

A fs.303, corre agregado el expediente Rol N°5227/2017, ordenado acumular a estos autos, en los que doña JIMENA ANGÉLICA AGUIRRE GALINDO y otros nueve comparecientes, interpusieron reclamación con motivo del acto eleccionario destinado a la renovación del Consejo Directivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, realizado el 30 de mayo de 2017. Dirigen la reclamación en contra de la Central Unitaria de Trabajadores, representada por doña BÁRBARA FIGUEROA SANDOVAL, ambos domiciliados en Alameda N°1346, Santiago.

Previamente, señalan que el reclamo se encuentra dentro del plazo legal y que los reclamantes tienen interés directo en el acto eleccionario, por ser directores de organizaciones sindicales afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores y haber participado como electores y algunos, incluso como candidatos en la elección realizada en agosto de 2016, derechos que no pudieron ejercer en la elección de 30 de mayo de 2017, debido a que este proceso eleccionario no se ajustó a la normativa legal y estatutaria, todo ello, en el contexto en que tuvo lugar la elección reclamada, en relación con la nulidad declarada por este Tribunal del acto eleccionario de 25 de agosto de 2016 y el cumplimiento de la señalada sentencia, de 11 de mayo de 2017, que los reclamantes refieren detalladamente en su libelo.

Denuncian que en el proceso eleccionario se detectaron los siguientes vicios:

1) La elección se llevó a cabo conforme a estatutos observados de legalidad; y, en subsidio, conforme a estatutos que quedaron sin efecto con posterioridad a esa fecha.

Al respecto, señalan que el 10 de febrero de 2017, un grupo de dirigentes de sindicatos afiliados a la Central, solicitaron a la Dirección del Trabajo que ejerciera el control de legalidad de los nuevos estatutos aprobados en votación realizada el 27 de enero de 2017. El 6 de abril de 2017, el Director del Trabajo observó los estatutos en dos aspectos fundamentales: 1) que al momento de llevarse a cabo la votación estos no estaban escriturados, circunstancia acreditada con certificado emitido por la ministro de fe de ese Servicio que asistió a la votación; y 2) que no se había cumplido el quorum de 3/5 que el estatuto anterior exigía para ser reformado. Confió un plazo de 45 días hábiles a la Central para que ésta acompañara antecedentes que desvirtuaran lo observado, bajo apercibimiento de tenerse por no efectuada la reforma.

La elección se llevó a cabo el 30 de mayo de 2017, sin que hubiera una resolución de la Dirección del Trabajo que tuviera por subsanadas las observaciones a la reforma, razón por la que estiman que el proceso eleccionario se rigió íntegramente por unos estatutos que a esa fecha estaban observados en su legalidad y debió, por tanto, llevarse a cabo conforme a los estatutos aprobados el 23 de enero de 2016.

Subsidiariamente, solicitan se declare la nulidad de la elección atendido que los vicios observados por la Dirección del Trabajo son insubsanables, quedando la reforma de estatutos sin efecto, con posterioridad a esa fecha, según demostrarán.

Par el caso que el Tribunal determine la legalidad de haberse realizado la elección conforme a los estatutos aprobados el 27 de enero de 2017, denuncian, además, los siguientes vicios:

2) No se hizo un nuevo acto eleccionario como ordenó la sentencia de este Tribunal Electoral, de 11 de mayo de 2017, sino que se continuó con uno anterior que tenía por objeto “sustituirse en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de este Tribunal Electoral”.

Lo resuelto por este Tribunal Electoral significaba realizar un nuevo proceso eleccionario. Se requería, por tanto, nueva inscripción de candidaturas, acreditación de pago de cuotas, ponderado de los últimos 12 meses, confección de nuevo padrón electoral, período de impugnación de candidaturas, de organizaciones sufragantes y de ponderados. Además, significaba que este nuevo proceso debía realizarse con posterioridad a la sentencia. Sin embargo -exponen- lo que hizo la demandada fue continuar con el proceso que se había iniciado en marzo de 2017. Lo único que tuvo lugar en fecha posterior a la sentencia fue la votación de día 30 de mayo de 2017, la nueva coordinación de ministros de fe y el escrutinio. Así, el

padrón fue confeccionado tomando en consideración requisitos que se habrían cumplido en marzo de 2017 respecto de una elección que se quería realizar el 20 de abril de 2017, en circunstancias que dichos requisitos debían verificarse respecto de la elección de 30 de mayo de 2017, contando plazos en relación con esta fecha.

A su juicio, la teoría de la reclamada, de que los nuevos comicios dan pleno cumplimiento a la sentencia de 11 de mayo de 2017, produce el absurdo de tener por cumplida una sentencia con actuaciones realizadas con anterioridad a su dictación y para un proceso eleccionario que se pretendía realizar el 20 de abril de 2017, con el objeto de burlar la misma sentencia que se proclamaría cumplida.

Exponen que la anterior irregularidad impidió la inscripción de nuevas candidaturas y listas; impidió contar con un nuevo período de acreditación e impugnación de listas, candidaturas y padrón electoral y no se renovaron todos los cargos elegidos en proceso de agosto de 2016, declarado nulo. Tampoco permitió que operara el mecanismo de resolución de conflictos, esto es, período de reclamaciones ante el Colegio Electoral Nacional (CEN). A su vez, los plazos para impugnar candidaturas, padrones y cualquiera otra irregularidad a través del CEN, se encontraban vencidos al momento de dictarse la sentencia.

Estos hechos constituyen infracciones legales, en cuanto se contravino el mandato de la sentencia de 11 de mayo de 2017, al no realizarse un nuevo acto eleccionario, con estricta sujeción a los estatutos; e infracciones a los artículos 99, 40 y 89 de los estatutos, en relación con el plazo de inscripción de candidaturas, verificación del pago de cuotas sociales y determinación del voto ponderado.

3) No se eligieron los cargos de Consejos Provinciales, Territoriales y Zonales.

Exponen que en la elección de 25 de agosto de 2016, declarada nula, no sólo se escogieron los miembros el Consejo Directivo Nacional, sino también se eligieron los miembros de los Consejos Provinciales, Territoriales y Zonales en todo el país. La sentencia de 11 de mayo de 2017 anuló la elección de agosto de 2016, ordenando realizar un nuevo acto eleccionario con estricta sujeción a las leyes y estatutos. Ello implicaba que la elección de agosto se debía repetir en su totalidad. Sin embargo, el 30 de mayo de 2017 se eligió únicamente a los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo Nacional, contraviniendo expresamente los estatutos que en su artículo 40 disponen, que ambas elecciones deben ser convocadas en el mismo acto y que la votación para elegir a los miembros del Consejo Directivo Nacional y de los Consejos Territoriales, se llevará a efecto en una misma fecha en todo el país.

La anterior, implicaría que en la actualidad (al tiempo de presentarse el reclamo) la Central no tiene consejeros territoriales vigentes, por efecto de la anulación de la elección de agosto de 2016. Pero la tesis de la reclamada es que esos



cargos sí continúan vigentes, puesto que la nulidad sólo habría afectado la elección de los Consejeros Nacionales.

De validarse esta tesis, estiman que se produciría el contrasentido que, parte de los representantes de la Central habrían sido elegidos bajo el amparo de unos estatutos, con una comisión electoral y con un padrón electoral distinto a los de los demás cargos, en circunstancias que los estatutos contienen reglas eleccionarias distintas y que la composición del cuerpo electoral de la elección de 2016 ascendía aproximadamente a 590.000 trabajadores representados y la de mayo de 2017, a 159.000, con el agravante que el primero estaba “abultado”, según se reconoce con el allanamiento de la reclamada y el fallo de 11 de mayo de 2017.

4) Aumento del número de socios de organizaciones contempladas en el padrón electoral: abultamiento del padrón.

Aseguran que el promedio de los últimos 12 meses considera socios abultados para elección de 2016, puesto que para la elaboración del ponderado de cada organización se consideró la cantidad de socios informados y acreditados por cada una (mediante pago de cuotas), para el anulado proceso eleccionario de 2016. Sin embargo, en dicho proceso las organizaciones acreditaron 144.000 socios más de los que efectivamente tenían (equivalente a 288.000 votos). De este modo, este vicio se trasladó al padrón de esta elección. Agregan que la sentencia de 11 de mayo de 2017 tuvo por acreditados los hechos denunciados en las reclamaciones (Rol N°4579/2016), entre ellas, el abultamiento del padrón en la cantidad señalada.

Señalan como ejemplo, cinco organizaciones que dieron cuenta del aumento en el padrón del año 2016, que representan una diferencia de 28.886 socios entre los registrados en Sistema Informático de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo (SIRELA) y el Padrón de 2016, las que detallan en recuadro de fs.351 vuelta.

Denuncian, asimismo, que el padrón electoral publicado por el CEN informa un mayor número de socios que los que contempla el SIRELA, ascendente a 31.292,9 socios e individualizan las 42 organizaciones con los mayores abultamientos de sus socios, todas con más de un 500% de inflación, según datos de la Dirección del Trabajo, en el cuadro contenido en el reclamo, de fs.352 a fs.353 vuelta.

Observan que, en algunos casos, el abultamiento de socios supera incluso la cantidad de trabajadores de una empresa, como ocurre en el caso del Sindicato Minera San Pedro Limitada, afiliado a Constramet, el cual acreditó 236 socios en el padrón, no obstante que la empresa a que pertenecen sus socios nunca ha tenido más de 70 trabajadores.

Afirman que, en total, han detectado que el aumento del número de socios asciende, al menos, a 31.292,9 de los 159.461 trabajadores, respecto de la información proporcionada por los mismos sindicatos a la Dirección del Trabajo, lo

que equivale a un total de 281.236,1 votos, si se tiene en cuenta que cada elector podía marcar 9 preferencias. El total de votos obtenidos por todas las listas fue de 774.408, por lo que el abultamiento señalado representa un 36,4% de los mismos, magnitud suficiente para alterar el resultado de la elección.

Hacen presente que la Dirección del Trabajo ha validado la información contenida en SIRELA (Ord. N°1635 de 13 de abril de 2017), proporcionada por las propias organizaciones sindicales, para determinar la cantidad de socios de las Centrales, a efectos de evaluar su representatividad, lo que permitió el otorgamiento a la Central Unitaria de Trabajadores de los tres cupos sindicales del Consejo Superior Laboral (Ord. N°425-3 de 24 de abril de 2017).

5) El padrón electoral considera organizaciones habilitadas para votar, siendo que oficialmente se encuentran inactivas o no aparecen registradas.

Señalan que de acuerdo al SIRELA, siete organizaciones estaban en receso (sin directiva vigente), al momento de llevarse a cabo la elección del Consejo Directivo Nacional y que detallan en el cuadro inserto a fs.354. Además, el Sindicato de Empresa Operaciones Centralizadas Latinoamericana Ltda., con 8 socios en Padrón 2017, aparece caducada. Y finalmente, en SIRELA no se encuentra registro alguno del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Independientes y otros que trabajan en el domicilio, Lo Espejo, con 60 socios en Padrón 2017.

Estas 9 organizaciones representan un total de 835 socios, equivalentes a 7.515 votos, es decir, el 1% del total de votos obtenidos por todas las listas.

6) El Colegio Electoral Nacional no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad del padrón.

Exponen que de acuerdo al inciso segundo del artículo 9° del Reglamento de Elecciones -incorporado al estatuto de la Central Unitaria de Trabajadores en reforma de enero de 2017-, dispone que el CEN podrá recabar antecedentes de la Dirección del Trabajo, los que tendrán un carácter referencial. El artículo 107 del estatuto reformado, señala que para determinar el número definitivo de afiliados a la organización base, el CEN ponderará conjuntamente los siguientes tres factores, a lo menos: a) El informe del Departamento de Organización; b) Los antecedentes recabados de la Dirección del Trabajo; y c) El número de afiliados cuyas cotizaciones se encuentran efectivamente pagadas.

Los reclamantes aseguran que el CEN no consultó los antecedentes a la Dirección del Trabajo. Señalan que, de hecho, en respuesta enviada el 23 de mayo de 2017 por la Presidenta del CEN a una de sus integrantes, Claudia Muñoz Ramírez, queda en evidencia su desinterés en investigar las inconsistencias advertidas entre el padrón y el SIRELA y requerir información a las organizaciones.

Lo anterior les habría permitido constatar que las siguientes 5 organizaciones sindicales habían informado 3.857 socios más que lo registrado en

SIRELA, lo que equivale a 34.713 votos, un 4,5% del total de votos obtenidos por las listas y que permite elegir 2 miembros del Consejo Directivo Nacional: Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes Ambulantes, del Transporte y Anexos, Sindicato de Trabajadores Independientes, Comerciantes Plaza Caupolicán Caino Zoológico Parque Metropolitano, Federación de Sindicatos de Call Center y Servicios Anexos (FETRACALL), Sindicato Intercomunal de Trabajadores Agrícolas Eventuales y Ramos Similares Manuel Rodríguez y Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrarios Sin Tierra El Esfuerzo.

Acotan que las dos últimas organizaciones se constituyeron en la misma región, en un breve período de tiempo una de la otra y ambas aparecen en SIRELA con cero socios y en Padrón, con 870 socios.

Además, habrían constatado que el Sindicato de Trabajadores Guanaco Compañía Minera Limitada, aparecía en SIRELA como afiliado a la Confederación de Trabajadores del Cobre, pero en el Padrón, como afiliado a Constramet.

7) Dirigentes electos que no cumplen los requisitos estatutarios para ser Consejeros Nacionales.

Denuncian que numerosos dirigentes fueron electos en el proceso 2017 aun cuando las organizaciones a que estaban afiliados no se encontraban al día en el pago de las cuotas sociales. Entre ellos, BÁRBARA FIGUEROA SANDOVAL (Colegio de Profesores), GUILLERMO SALINAS (Sindicato de Trabajadores Independientes a Honorarios de Santiago) y JOSÉ MANUEL DÍAZ ZAVALA (Colegio de Profesores).

Señalan que, si bien los estatutos permiten a los Directores Nacionales y Territoriales, excusarse de la obligación de ser dirigentes de sindicatos base, mientras mantengan su cargo en la Central Unitaria de Trabajadores, ello no los exime de la obligación de pertenecer a alguna organización afiliada y al día en el pago de sus cuotas. Agregan que un dirigente no está habilitado para pagar cuotas sindicales de manera directa, independiente de la organización a que está afiliado, pues se correría el riesgo que terceros ajenos a la Central o dirigentes de organizaciones desafiliadas, resultasen electos.

Por otro lado, afirman que, como consecuencia de lo resuelto por sentencia de 11 de mayo de 2017, que declaró nula la elección de 25 de agosto de 2016, además de no tener al día sus cotizaciones, tampoco gozaban de la calidad de directores de la Central, los siguientes dirigentes electos como miembros del Consejo Directivo Nacional, cinco de ellos además, designados miembros del Comité Ejecutivo actual: MARÍA AMALIA PEREIRA CAMPOS, Lista B, Primera Vicepresidencia; BÁRBARA FIGUEROA SANDOVAL, Lista C, Presidencia; MANUEL AHUMADA LETELIER, Lista C, Consejero; JAIME GALLARDO ORELLANA, Lista C, Consejero; GUILLERMO SALINAS VARGAS, Lista C, Vicepresidencia de



Organización; MARCO CANALES HUENCHUAN, Lista C, Consejero; ALEJANDRA TAMARA MUÑOZ VALENZUELA, Lista E, Vicepresidencia de Relaciones Internacionales; JOSÉ MANUEL DÍAZ ZAVALA, Lista E, Tesorería; FIDEL YURI CHÁVEZ, Lista E, Consejero; y ANA BERNARDA BELL JARAS, Lista E, Consejera.

8) Fueron electos consejeros candidatos que no estaban incluidos en el Padrón Electoral.

Refieren que, por disposición del artículo 99° de los estatutos, pueden ser candidatos al Consejo Directivo Nacional todos los dirigentes sindicales o gremiales en posesión de un cargo conforme a los estatutos de sus organizaciones, que se encuentren incluidos como electores en el Padrón Electoral, con excepción de los delegados o representantes provenientes de los sindicatos nacionales, los que sí podrán ser candidatos a los Comités Territoriales.

Denuncian que no aparecen en el Padrón, los siguientes candidatos electos: ÁNGELA RIFO CASTILLO (Lista C), OSVALDO ZÚÑIGA PINO (Lista C), GEORGINA CORTÉS ARAYA (Lista E) y XIMENA OVALLE (Lista E).

9) Electores en el Padrón que no debiesen haber estado habilitados para votar.

Señalan que hubo personas que participaron en el proceso electoral con ponderado 1, en calidad de consejeros nacionales o territoriales de la Central, es decir, no acreditaron participación en calidad de dirigentes de otras organizaciones. La calidad de consejero nacional o territorial, fue acreditada para la elección que se pretendía realizar el 20 de abril de 2017. Pero ella no estaba vigente al momento de participar en el proceso de 30 de mayo de 2017, atendido que, por sentencia de 11 de mayo de 2017, se declaró nula la elección de agosto de 2016, en cuya virtud habían adquirido tales cargos.

En tal condición -sostienen- se encuentra gran parte de los consejeros electos, incluyendo la Presidenta del CEN, a quienes los reclamantes individualizan de fs.356 vuelta a fs.357 vuelta y que corresponden a 31 Consejeros Nacionales y 59 Consejeros Territoriales.

10) Candidaturas y Consejeros electos con pago fuera de plazo.

Al respecto, señalan que conforme disponen los artículos 90 y 94 del estatuto, las organizaciones y sus sindicatos habilitados para votar, deberán acreditar estar afiliadas con, a lo menos, 90 días de anticipación a la fecha de las elecciones, junto con tener las cuotas al día, al penúltimo mes anterior a las elecciones, es decir, hasta febrero de 2017.

Exponen que la Tesorería General hizo recepción de las cuotas del mes de febrero de 2017, hasta las 23:59 horas del 15 de marzo de 2017 y se promediaron los últimos 12 meses pagados por cada organización, esto es, marzo de 2016 a febrero de 2017. Pese a lo anterior, hubo organizaciones que pagaron con posterioridad a la fecha límite e incluso presentaron candidatos, como habría

ocurrido con la Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales (FEMEFUM), la que gracias a este vicio pudo inscribir la candidatura de don FABIÁN CABALLERO VERGARA, quien resultó electo como miembro del Comité Ejecutivo de la Central, sin cumplir, además, con el requisito que su lista eligiera, a lo menos, cinco Consejeros Nacionales Titulares, como exige el artículo 47 del estatuto.

Señalan lo anterior, sin perjuicio de acreditar el mismo vicio en otras organizaciones, con las pruebas que se rendirán.

11) Irregularidades en los informes de pagos utilizados para el cálculo.

Exponen los reclamantes que, de acuerdo al informe de pago de cuotas sindicales entregado por Tesorería en marzo de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes Ambulantes del Transporte y Anexos sólo pagó cuotas por un total de 950 socios en febrero de 2017 y se le ponderó la misma cantidad de socios, sin haber pagado ninguna cuota el año 2016 ni en enero de 2017. Agregan que, inexplicablemente, en proceso de agosto de 2016 la Secretaría de Organización, encabezada por Guillermo Salinas, le acreditó un total de 3.500 socios, en circunstancias que no había pagado cuotas en ese año y que en SIRELA 2016, sólo registraba 225 socios y en SIRELA 2017, apenas 100.

A su juicio, debe aplicarse en este caso el artículo 89 del estatuto, para calcular su ponderado, que dispone que ninguna organización podrá acreditar una cantidad de socios mayor a la cantidad resultante del promedio de las cantidades de socios por las cuales la organización ha pagado cuotas mensuales a la Central, durante los 12 meses inmediatamente anteriores al cierre del padrón, de modo tal que el ponderado de esta organización debió haber sido 79,1 y no 950 (equivalente a 8.550 votos), como aparece en el Padrón.

12) Cambio irregular en el Padrón del ponderado y de la organización del Tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores.

Refieren que José Manuel Díaz Zavala, el tercer candidato más votado en la elección de 30 de mayo de 2017, afirmó el 27 de marzo de 2017 que sus cotizaciones “están al día en el Colegio de Profesores, organización a la que me encuentro afiliado desde hace 10 años.”.

Aseguran que es de público conocimiento que esa asociación gremial congeló su participación en la Central Unitaria de Trabajadores desde enero de 2017, dejando de pagar cuotas mensuales, lo que habría hecho imposible una nueva postulación del señor Díaz Zavala. Sin embargo -agregan-, a partir del 20 de mayo de 2017 se modificó el Padrón, figurando el aludido en calidad de Presidente del Sindicato Nacional Interempresa Walmart y Actividades Conexas, RSU 13072129, que agrupa a trabajadores de las siguientes filiales de la supermercadista internacional: Administradora de Supermercados Hiper Limitada, Administradora de Supermercados Express Limitada y Abarrotes Económicos S.A.



De ello, desprenden que el señor Díaz Zavala salió electo y ejerció su derecho a sufragio por una organización distinta de aquella con la que figuraba cuando acreditó cumplir los requisitos para participar en la elección, siendo improbable, a su juicio, que este profesor y dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores haya sido contratado recientemente por alguna de las filiales Walmart.

Estiman infringido el artículo 96 del estatuto, por cuanto el plazo para haber hecho la modificación de la directiva de la organización y el ponderado del elector estaba vencido a la fecha de la elección. Agregan que el sindicato interempresa en cuestión es la décima organización más inflada en el Padrón, con 971,4%. Que su pago de cuotas registra alza abrupta en febrero de 2017, cuando pasa de estar “congelada”, a pagar por 1.500 socios. Además, su ponderado de 272 socios es absolutamente contradictorio con los 3 dirigentes que posee, lo que supone una organización de entre 250 a 999 socios, conforme lo dispuesto en el artículo 235 del Código del Trabajo.

Concluyen que, de no mediar el cambio de ponderado y de organización, fuera de estatutos, don José Manuel Díaz Zavala no sólo no hubiese ponderado 90,6, sino que no podría haber sido candidato ni mucho menos electo Consejero Nacional y Tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores.

13) Cálculo de cifra repartidora se encuentra errado y afectó designación de consejero.

Sobre el particular, alegan que, de acuerdo a los antecedentes de la votación, la ecuación matemática arrojó la cifra repartidora de 16.299, por lo que la Lista E, con 293.382 votos, debió obtener 18 consejeros, mientras que la Lista D, con 31.345 votos, sólo 1 consejero. Así, correspondía que fuera proclamada consejera doña Andrea del Pilar Palacios Riquelme (Lista E), pero el CEN nombró consejero al candidato Mario Olivares Ríos (Lista D). Esta irregularidad fue oportunamente advertida por la empresa EVoting, a través de correo electrónico enviado el 1 de junio de 2017 al Colegio Electoral Nacional, pese a lo cual el Colegio omitió lo informado por la empresa, alterando el resultado de la elección.

Concluyen señalando que las irregularidades denunciadas afectan la transparencia y el normal desarrollo del acto eleccionario reclamado, las posibilidades de impugnación, de entendimiento del proceso por los involucrados y sus resultados y, a su juicio, deben concluir en la declaración de nulidad del mismo, por lo que solicitan se declare:

1. Que el proceso eleccionario de renovación total del Consejo Directivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores adolece de irregularidades y vicios que afectan su validez y por consiguiente: a) Se deje sin efecto el acto eleccionario reclamado; b) Se ordene a la reclamada realizar un nuevo proceso eleccionario íntegro, para designar a los miembros del Consejo Directivo Nacional, Consejos



Provinciales y Consejos Zonales o los cargos que se determinen; c) Se indiquen los términos conforme a los cuales debe realizarse la nueva elección, a objeto que no existan nuevas controversias sobre los alcances de la sentencia que se dicte; y d) Se instruyan medidas para garantizar la integridad del padrón electoral y evitar nuevos vicios de nulidad por este motivo.

2. En subsidio: a) Se ordene a la reclamada realizar un nuevo proceso eleccionario para designar a los miembros de los Consejos Provinciales y Consejos Zonales, anulados por sentencia de 11 de mayo de 2017; b) Que se anule la elección de las siguientes personas, por no cumplir los requisitos para ser Consejeros Nacionales: María Amalia Pereira Campos (Lista B), Bárbara Figueroa Sandoval (Lista C), Manuel Ahumada Letelier (Lista C), Jaime Gajardo Orellana (Lista C), Guillermo Salinas Vargas (Lista C), Marco Canales Huenchuan (Lista C), Alejandra Tamara Muñoz Valenzuela (Lista E), José Manuel Díaz Zavala (Lista E), Fidel Yuri Chávez (Lista E) y Ana Bernarda Bell Jaras (Lista B); c) Se anule la elección de las siguientes personas, por no haber sido incorporados válidamente al padrón: Ángela Riffo Castillo (Lista C), Osvaldo Zúñiga Pino (Lista C), Georgina Cortés Araya (Lista E) y Ximena Ovalle (Lista E); d) Se anule la elección de Fabián Caballero Vergara, porque la organización a que está afiliado y en cuya representación presentó su candidatura, pago las cuotas sociales fuera del plazo previsto en el estatuto; e) Se anule la elección de José Manuel Díaz Zavala, porque el cambio de organización a que estaba afiliado se registró fuera del plazo estatutario; y f) Se anule la elección de Mario Olivares Ríos, porque el cálculo de la cifra repartidora se encuentra errado y debió ser designado otro candidato de la Lis E en su lugar.

3. Se oficie a la Dirección del Trabajo, a objeto que proceda a eliminar de sus registros (SIRELA) los cargos objeto de la declaración de nulidad que se dicte, solicitándole emitir un certificado de vigencia que así lo acredite.

4. Se condene en costas a la parte reclamada.

A fs.456 rola contestación de la reclamada, por intermedio de su apoderado, abogado Leonardo Mena Díaz. Solicitó el rechazo del reclamo en todas sus partes, con costas, en razón de los siguientes antecedentes.

En primer lugar, refiere una exposición precisa y circunstanciada de los hechos, en idénticos términos a lo planteado en el escrito de contestación presentado en los autos Rol N°5226/2017, en relación con el desarrollo, temas abordados y acuerdos del 11° Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, efectuado los días 27 y 28 de enero de 2017, quorum de aprobación de la reforma estatutaria, observaciones formuladas por la Dirección del Trabajo y respuesta de la Central, ya descritos en esta sentencia, por lo que no se transcribirán aquí.

En cuanto a los vicios que alegan los reclamantes de los autos Rol N°5227/2017:

1) La elección se llevó a cabo conforme a estatutos observados de legalidad; y, en subsidio, conforme a estatutos que quedaron sin efecto con posterioridad a esa fecha.

Explican que las irregularidades evidenciadas con motivo de la elección de 26 de agosto de 2016, obligaron a una revisión y modificación profunda de los estatutos, a fin de evitar que la necesaria elección que debía realizarse con posterioridad no presentara las dificultades de la anterior. Luego y sobre la base de idénticos fundamentos desarrollados en la primera parte del escrito de contestación, ya referidos, señalan que, a su juicio, la Dirección del Trabajo no necesita otorgar resolución alguna que dé por subsanadas las observaciones planteadas, ni mucho menos una que otorgue validez a los nuevos estatutos, pues no existe ninguna disposición del Código del Trabajo ni de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo que obligue a ello. Indican, además, que ninguna observación era insubsanable, porque las objeciones decían relación con la petición de antecedentes documentales de respaldo.

2) No se hizo un nuevo acto eleccionario como ordenó la sentencia de este Tribunal Electoral, de 11 de mayo de 2017, sino que se continuó con uno anterior que tenía por objeto “sustituirse en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de este Tribunal Electoral”.

Señala que esta aseveración es falsa, porque el acto eleccionario se hizo con estricta sujeción a lo estatutos; e irrespetuosa, porque se intenta hacer creer que se ha tratado de burlar el imperio de este Tribunal, cuando lo que se hizo fue justamente lo contrario, acorde a lo dispuesto en resolución de 25 de mayo de 2017, que ordenó comunicar a la Dirección del Trabajo que la suspensión decretada en los autos Rol N°4579/20016 y 4580/2016 Acumulados, respecto del acto eleccionario programado para el 20 de abril de 2016 y que también afectó a la convocatoria de cualquier otro acto eleccionario, quedó sin efecto en razón de haberse dictado sentencia definitiva que declaró nula la elección de 25 de agosto de 2016.

A su juicio, lo que en realidad molesta a los reclamantes es no haber obtenido una sentencia distinta en la causa Rol N°4579/2016, puesto que apostaban a que la sentencia iba a ordenar una nueva elección, con fechas, plazos y condiciones fijadas en el mismo fallo, de modo tal que sólo tras la sentencia se iniciaría un completo proceso con miras a las exigencias precisas y determinadas que realizaría el Tribunal.

3) Sobre el hecho de no haberse elegido los cargos de Consejos Provinciales, Territoriales y Zonales, explica que la Central sabía que debía realizar pronta elección, porque era evidente y de público conocimiento que la efectuada el 26 de agosto de 2016 era irregular. De ahí, que realizara un Congreso extraordinario, que se modificaran los estatutos y que, entre otras cosas, se optara

por la contratación de una empresa externa para asegurar la transparencia electoral a partir del voto electrónico.

Reiterando conceptos ya expuestos en este fallo, agrega que esta urgencia justificó la redacción del artículo primero transitorio de los estatutos que dispone que el Congreso Nacional aprobó el desarrollo de una elección del Consejo Directivo Nacional a desarrollarse durante el mes de abril de 2017. Asimismo, señaló que es evidente que lo ideal habría sido repetir la votación completa, pero que no hay elementos antijurídicos en haberlo hecho sólo del Consejo Directivo, porque así fue previsto en los propios estatutos. Reitera que el Consejo Directivo Nacional Ampliado se reuniría los días 21 y 22 de julio de 2017, con el fin de fijar la elección para los cargos de Consejeros Provinciales, Zonales y Territoriales.

4) En cuanto al aumento del número de socios de organizaciones contempladas en el padrón electoral, la reclamada repite los argumentos relacionados con la imposibilidad de conocer el número exacto de asociados de cada organización, que radicaría en la autonomía sindical, y que ya fueron referidos en esta sentencia al detallar los términos de la contestación del reclamo deducido en los autos Rol N°5226/2017.

5) Sobre la denuncia consistente en que el padrón electoral consideró organizaciones habilitadas para votar, siendo que oficialmente se encuentran inactivas o no aparecen registradas, Aseguró que las organizaciones que los reclamantes señalan “en receso”, no lo estaban, ni al momento de la confección del Padrón ni al momento de la votación. Señalan desconocer el nivel de actualización de la información de SIRELA, considerando que el Director Nacional del Trabajo ha reconocido el carácter meramente referencial del sistema.

6) Respecto del hecho de no haber adoptado el Colegio Electoral Nacional las medidas necesarias para resguardar la integridad del padrón, aseguró que el CEN adoptó todas las medidas que contemplan los estatutos, siendo el insumo empleado el pre informe confeccionado por las tres secretarías del Comité Ejecutivo: Tesorería Nacional, Secretaría de Organización y Secretaría General. También recabó antecedentes de la Dirección del Trabajo, no obstante que ellos tienen carácter referencial y no vinculante. Aseguran desconocer a qué se refieren los reclamantes con el supuesto desinterés evidenciado por la señora Claudia Muñoz Ramírez.

7) En cuanto a dirigentes electos que no cumplen los requisitos estatutarios para ser Consejeros Nacionales, expuso que la afirmación de los reclamantes no es efectiva, porque existe un error de interpretación de los estatutos. Ninguno de los dirigentes mencionados en el reclamo incumple los requisitos estatutarios; lo que existe es un error de interpretación que se ve especialmente reflejado en el caso de los candidatos Bárbara Figueroa, Jaime Gajardo y José



Manuel Díaz, porque estos no optaron como dirigentes del Colegio de Profesores, sino como Directores de la Central Unitaria de Trabajadores.

8) Acerca del hecho de haber sido elegidos como consejeros, candidatos que no estaban incluidos en el Padrón Electoral, señaló desconocer de dónde obtienen los reclamantes esta información. Agrega que lo cierto es que el padrón publicado oportunamente en la web de la Central, enviado a las organizaciones base y a la Dirección del Trabajo, contempla a los señores Ángela Riffo, Osvaldo Zúñiga, Georgina Cortés y Ximena Ovalle.

9) Respecto de electores en el Padrón que no debiesen haber estado habilitados para votar, aseguró que nuevamente se trata de un error de interpretación legal y judicial. A juicio de la reclamada, los reclamantes mencionan una lista completa de consejeros que no deberían haber estado habilitados para votar, porque habrían perdido la calidad de socios por efecto de la sentencia del Tribunal Electoral. Señalan no estar de acuerdo con esta interpretación, pues el único efecto de la sentencia del Tribunal fue el de declarar nula la elección; en ningún caso se pronunció sobre quiénes poseían o no la calidad de socios y por ende, de votantes en la próxima elección.

10) Sobre candidaturas y consejeros electos con pago fuera de plazo, sostuvo que tal afirmación es falsa, puesto que el requisito para participar en la elección era encontrarse al día en el pago de las cuotas correspondientes al mes de febrero de 2017 y que el hecho que para efectos administrativos el pago pueda realizarse los primeros días de marzo, no reviste ninguna irregularidad ni da cuenta de ningún carácter fraudulento.

11) En cuanto a irregularidades en los informes de pagos utilizados para el cálculo, señaló que la explicación de los reclamantes es contradictoria, pues dicen que el Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes Ambulantes del Transporte y Anexos, no pagaron una sola cuota durante los años 2016 y 2017 y que sólo pagaron cuotas por el mes de febrero de 2017. Sin embargo -agrega- en el reclamo se indica que en el padrón de 2016 la organización ponderaba 3.500 votos, lo que plantea la interrogante de por qué ponderaba y por qué aparecía en el padrón una organización que no había pagado cuotas en el año 2016.

12) Acerca del cambio irregular en el Padrón del ponderado y de la organización del Tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores, expuso que existe aquí un problema de comprensión, toda vez que los reclamantes insinúan que el señor José Manuel Díaz no sería dirigente del Sindicato Nacional Interempresa Walmart y Actividades Conexas, por su condición de profesor afiliado a su colegio profesional.

Explica que el señor Díaz no era dirigente del Colegio de Profesores, de modo que malamente podría haber postulado a consejero de la Central Unitaria de Trabajadores en esa calidad. Asevera que el señor Díaz es trabajador de la señalada

empresa desde 2014 y participó activamente en la formación de ese sindicato. No existe prohibición legal para que un profesor de historia pueda trabajar en un rubro distinto al de las aulas de clases ni tampoco para que pueda pertenecer, al mismo tiempo, a su colegio profesional y al sindicato donde trabaja habitualmente.

13) Respecto del error en el cálculo de la cifra repartidora que afectó la designación de un consejero, reconoce el error en el cálculo, producto de un involuntario error matemático y asegura que el cambio estaría siendo realizado y se informará a la brevedad. Agregan que en este punto los reclamantes carecen de interés, puesto que no participaron en la elección ni fueron parte de la Lista D ni de la Lista E, de modo que cualquier reclamación al respecto corresponde a los afectados.

A fs. 615 se recibió la causa a prueba. Las partes rindieron la documental que rola en autos. Las reclamantes, rindieron la testifical que rola de fs.738 a fs.741; fs.742 a fs.750 y de fs.752 a fs.758. La reclamada rindió confesional de don Víctor Ulloa Zambrano, a fs.1055.

Se cumplieron las siguientes diligencias: fs.1045, Empresas EVoting, remitió copia del Padrón Electoral empleado; fs.1135, Dirección del Trabajo remitió antecedentes sobre reforma estatutaria (Oficio N°0158); fs.1138, Dirección del Trabajo, remitió copia del Ord.1537 (Oficio N°0582); fs.1160, Dirección del Trabajo informó acerca de la función que cumple el SIRELA y si la Central Unitaria de Trabajadores subsanó observaciones formuladas a la reforma estatutaria (Oficio N°0861); fs.1195, Colegio de Profesores informó acerca del congelamiento de su afiliación a Central Unitaria de Trabajadores; fs.1199, Empresa Walmart informó sobre calidad de trabajador del dirigente José Manuel Díaz Zavala; y a fs.1227, el Tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores, informó al tenor de los Puntos N°7 y N°9 de la interlocutoria de prueba.

Se tuvieron a la vista los autos Rol N°4579/2016 y Rol N°4580/2016, acumulados.

A fs.1.230 se trajeron los autos en relación.

Se hizo relación pública de estos antecedentes y se oyeron los alegatos de los apoderados de las partes, quedando los autos en acuerdo, todo ello, como consta de lo certificado a fs.1234.

#### CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA TACHA DE LA TESTIGO PATRICIA ALEJANDRA GALAZ GALLARDO, FORMULADA A FS.738 Y A LOS INCIDENTES DE OPOSICIÓN DEDUCIDOS EN LA AUDIENCIA DE TESTIGOS, A FS. 743, FS.744 y FS.746.

1° Que a fs.738, la parte reclamada formuló tacha contra la testigo mencionada, por la causal establecida en el N°4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, a su juicio, la testigo habría declarado que presta

habitualmente (servicios) o se desempeña habitualmente como dependiente del reclamante señor Ulloa.

Examinados los dichos de la testigo señora Galaz respecto de las preguntas previas que le fueron formuladas, ésta declaró que no tiene una íntima amistad con don Víctor Ulloa; que siempre ha tenido una relación laboral con él y requerida para que aclare a qué se refiere con una relación laboral, señaló que en algún momento fue Tesorero (el señor Ulloa) de la Central Unitaria de Trabajadores y agrega: “yo fui contratada por dicha entidad como secretaria de la Tesorería Nacional.”. No se advierte, por tanto, que la testigo haya expresado ser dependiente del señor Ulloa, sino claramente haber sido contratada por la Central Unitaria de Trabajadores, parte reclamada en autos, por lo que no se configura a su respecto la causal de inhabilidad que se invoca, debiendo, por tanto, ser desestimada en definitiva.

2° Que la oposición deducida por la parte reclamante respecto de la contra interrogación formulada al testigo Luis Alberto Salas Espinoza, para que dijese “si conoce la cantidad de socios por cuyas cuotas cotiza la organización a la cual Ud. pertenece y según declaró se encuentra afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores, esto es, la ANEF”, se desestimarán, toda vez que los hechos a que se refiere se encuentran relacionados con el Punto de prueba N°1 respecto del cual se presentó la declaración del testigo.

Lo propio cabe señalar y por la misma razón, sobre las oposiciones formuladas a fs.744, respecto de interrogaciones y contra interrogaciones planteadas al mismo testigo, en relación con su declaración acerca de los hechos a que se refiere el Punto N°4 del auto de prueba y de la oposición a la contra interrogación formulada al testigo Andrés Sergio Giordano Salazar, a fs.746.

## II.- SOBRE EL FONDO.

3° Que, previamente, debe dejarse establecido, en cuanto a la extensión de la competencia de este Tribunal Electoral Regional, que el inciso final del artículo 10 de la Ley N°18.593, dispone que la resolución de las calificaciones y reclamaciones comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate.

4° Que con motivo del proceso eleccionario efectuado por la Central Unitaria de Trabajadores, que estuvo destinado a la renovación de su Consejo Directivo Nacional y cuya votación tuvo lugar el 30 de mayo de 2017, se dedujeron dos reclamos ante este Tribunal Electoral, interpuestos, el primero, en los autos Rol N°5226/2017, por don Víctor Ulloa Zambrano, dirigente nacional y otros nueve dirigentes sindicales afiliados a esa Central Sindical a través de sus respectivas organizaciones sindicales, antes individualizadas; el segundo, en los autos Rol

N°5227/2017, encabezado por doña Jimena Angélica Aguirre Galindo y otros, todos afiliados a asociaciones de funcionarios y sindicatos asociados a la misma Central Sindical. Se ordenó su acumulación, por resolución de fs.490, por tratarse de procesos que inciden en una misma elección y requerir, por tanto, de la dictación de una misma sentencia.

5° Que ambas impugnaciones coinciden en los hechos denunciados, fundamentalmente, en la circunstancia que la elección reclamada se habría llevado a efecto en contravención a lo resuelto por este Tribunal Electoral en sentencia de 11 de mayo de 2017, pronunciada en los autos Rol N°4579/2016 y N°4580/2016, acumulados, que acogió las reclamaciones deducidas con motivo de la elección efectuada el 25 de agosto de 2016 en la Central Unitaria de Trabajadores, atendido el allanamiento de la Central Sindical, presentado por intermedio de su Presidenta, doña Bárbara Figueroa Sandoval, en el que se reconocieron categóricamente y en forma pura y simple los hechos denunciados en los reclamos interpuestos y dispuso la nulidad de la elección efectuada el 25 de agosto de 2016 en la Central Unitaria de Trabajadores, ordenando a dicha organización sindical proceder a la realización de un nuevo acto eleccionario, con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias que le sean aplicables.

6° Que, al fundar sus alegaciones, los reclamantes han señalado que el proceso eleccionario de 30 de mayo de 2017 infringió lo resuelto en la señalada sentencia, puesto que no se efectuó un nuevo acto eleccionario, sino que se continuó con uno iniciado en el mes de marzo de 2017 y porque la elección no fue íntegra, ya que sólo se renovó a los miembros del Consejo Directivo Nacional, omitiéndose la elección de los Consejeros Provinciales, Territoriales y Zonales. Además, que no se ajustó a las normas legales y estatutarias que le son aplicables, puesto que se rigió por unos estatutos reformados que no se encontraban vigentes, atendidas las observaciones formuladas a la modificación por la Dirección del Trabajo.

Agregan que aun cuando se considere que los estatutos reformados se encontraban en vigor, el proceso eleccionario estaría afectado por múltiples contravenciones a dicha nueva normativa, relacionadas con la convocatoria, la falta de publicidad oportuna; el sistema de votación electrónica empleado, en oposición al sistema presencial o material del voto que contempla el estatuto; omisión de las distintas etapas del proceso eleccionario y falta de depuración del padrón electoral, como consecuencia de no haberse dado cumplimiento al fallo y de haberse continuado con un proceso iniciado con anterioridad a esa resolución; abultamiento en el Padrón Electoral del número de socios de las organizaciones afiliadas; inclusión de organizaciones inactivas o que no aparecen registradas en SIRELA; candidatos que no figuraron en el Padrón; inclusión como electores habilitados y como candidatos, de dirigentes que, a raíz de la nulidad declarada, perdieron su calidad de tales; candidatos electos con pagos fuera de plazo; irregularidades en los



informes de pagos utilizados para el cálculo de ponderados; incorporación irregular al Padrón, del ponderado y organización del dirigente José Manuel Díaz Zavala; y errores en el cálculo de la cifra repartidora.

7° Que, en su contestación, la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y las integrantes del Colegio Electoral Nacional, Holanda Vidal Caballero, Marcia Maldonado Cortez y Fabiola Yánquez Vidal, señalaron sobre este particular, que existían razones de contexto para realizar en primer lugar la elección del Consejo Directivo Nacional. Argumentaron que la Central sabía que debía realizar una pronta elección, atendidas las irregularidades que afectaban a la efectuada el 25 de agosto de 2016, que fueron de público conocimiento; y que ello justificó la reforma estatutaria, la contratación de una empresa externa para implementar el voto electrónico y la redacción de una norma estatutaria de carácter transitorio, que aprobó el desarrollo de una elección de ese Consejo Directivo a efectuarse en el mes de abril de 2017, finalmente programada para el día 20 de ese mes y año. Agregan que lo ideal habría sido repetir la votación completa, pero que no existían elementos antijurídicos en haberlo hecho sólo respecto del Consejo Directivo Nacional.

Aseveran que el acto eleccionario de 30 de mayo de 2017 no infringió lo ordenado por este Tribunal, basándose para ello en lo dispuesto en resolución de 25 de mayo de 2017, que dejó sin efecto la suspensión decretada en los autos Rol N°4579/2016 y N°4580/2018 acumulados, que afectaba tanto a la convocatoria del acto eleccionario fijado para el 20 de abril de 2017, como a la convocatoria de cualquiera otra elección.

8° Que es necesario precisar que, con ocasión de la elección efectuada por la Central Unitaria de Trabajadores el 25 de agosto de 2016, se presentaron ante este Tribunal Electoral dos reclamaciones, ingresadas los días 13 y 14 de septiembre, ambas de 2016, bajo los Roles N°4579/2016 y N°4580/2016, respectivamente. Los reclamos fueron notificados a la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, doña Bárbara Figueroa Sandoval y a las integrantes del Colegio Electoral Nacional, doña Carola Salas Gómez y doña Patricia Salazar Sotomayor, el 30 de septiembre de 2016. Dicho proceso siguió su curso, recibándose la contestación de doña Carola Salas Gómez, en la correspondiente etapa de discusión, para proseguir con la etapa probatoria, en la que se tuvo por confesa a la señora Figueroa de los hechos afirmados categóricamente en el pliego de posiciones acompañado en audiencia de confesión, a la que fue citada por dos veces y no asistió. Se acumularon tres tomos de antecedentes en su tramitación.

Luego, estando aún pendiente el proceso judicial y habiéndose puesto en conocimiento de este Tribunal la decisión de la directiva de la Central Sindical, de efectuar un nuevo proceso de elecciones el día 20 de abril de 2017, se decretó, por resolución de 11 de abril de 2017, la suspensión del acto eleccionario



programado para esa fecha, destinado a la nominación del Consejo Directivo, ordenándose a la organización abstenerse de convocar o de efectuar cualquier otro acto eleccionario destinado a la nominación de los integrantes de los organismos de dirección que contemplan sus estatutos, en tanto no se dictara sentencia definitiva en esos autos y ésta quedase ejecutoriada.

Finalmente, y como consecuencia de haberse allanado doña Bárbara Figueroa Sandoval a los reclamos deducidos y no existiendo oposición, se dictó la sentencia de 11 de mayo de 2017, que, acogiendo las reclamaciones, declaró nula la elección de 25 de agosto de 2016 y ordenó a la Central Unitaria de Trabajadores proceder a la realización de un nuevo acto eleccionario, con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias aplicables. Seguidamente, por resolución de 25 de mayo de 2017, se dejó sin efecto la suspensión antes decretada, en razón de la nulidad declarada.

9° Que de lo dicho, se tiene que la Central Unitaria de Trabajadores, por intermedio de su Presidenta, doña Bárbara Figueroa Sandoval, estuvo en conocimiento de la existencia del proceso de reclamación que impugnaba el acto eleccionario de 25 de agosto de 2016 desde su inicio, cuya tramitación se extendió hasta el 11 de mayo de 2017, fecha de dictación de la sentencia definitiva y que, no obstante ello, la organización sindical convocó y organizó un nuevo acto eleccionario, sin esperar las resultas del proceso judicial pendiente, hecho del que existió constancia en autos y que motivó la suspensión de la convocatoria, por esta misma y precisa razón, de encontrarse pendiente el pronunciamiento definitivo sobre las irregularidades denunciadas que afectaban la validez de la elección reclamada, cuestión que fue señalada explícitamente en la resolución de 11 de abril de 2017, como se lee en su considerandos Cuarto, Quinto y Sexto, que disponen:

*“4° Que tras el acuerdo de convocar a un nuevo acto eleccionario, adoptado por el Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y las medidas adoptadas por el Directorio para su implementación, subyace la decisión de declarar nula la elección de 25 de agosto de 2016, o al menos, de privarla de sus efectos jurídicos, actuación que carece del más mínimo sustento legal, cuya finalidad, como reconoce la propia organización, ha sido la de subsanar las dificultades advertidas en las pasadas elecciones de agosto de 2016 y que implica inequívocamente la intención de sustituirse en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de este Tribunal Electoral.”.*

*“5° Que la facultad de conocer de los reclamos que se deduzcan contra las elecciones de carácter gremial, de resolverlos y de hacer cumplir lo resuelto, pertenece exclusivamente a los Tribunales Electorales Regionales, cuya jurisdicción emana de la Constitución Política y de la ley. En la especie, tales atribuciones corresponden a este Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que ha sido legalmente requerido para pronunciarse respecto de la regularidad del acto*



*eleccionario efectuado el 25 de agosto de 2016 en la Central Unitaria de Trabajadores, lo que hará en la oportunidad procesal correspondiente, mediante la dictación de la sentencia definitiva, la que, una vez ejecutoriada, lo faculta para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo resuelto, conforme disponen los artículos 25° y 27° de la Ley N°18.593.”.*

*“6° Que agrava la actuación de la organización sindical, el hecho que la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, doña Bárbara Figueroa Sandoval; y además, la Presidenta y la Secretaria del Colegio Electoral Nacional que tuvo a su cargo la elección de 25 de agosto de 2016, doña Carola Salas Gómez y doña Patricia Salazar Sotomayor, respectivamente, fueron debidamente emplazadas en estos autos, como consta a fs.214 y a fs.283, encontrándose, por tanto, en conocimiento de la existencia del proceso de reclamación que se sigue ante este Tribunal Electoral.”.*

10° Que la circunstancia que las irregularidades de que adoleció el acto eleccionario de 25 de agosto de 2016, fuesen de público conocimiento -hecho catalogado por la Presidenta de la Central Sindical como “razones de contexto”-, en nada alteraba la ritualidad del proceso judicial pendiente, ni tampoco autorizaba a esa organización sindical a convocar un nuevo acto eleccionario, sobreponiéndose a la actuación jurisdiccional.

Por el contrario y, como señalan en su escrito de contestación, estando conscientes de los defectos de que adolecía esa elección y de la urgente necesidad de efectuar un nuevo acto eleccionario, lo propio habría sido plasmar oportunamente este reconocimiento en el proceso judicial, ya fuese al contestar la demanda, o bien, en un acto posterior, pero próximo, de allanamiento, para dar paso a la conclusión formal de las causas pendientes, mediante la dictación de la sentencia definitiva. Y no como se actuó en la especie, en que consta que en el mes de enero de 2017 la Central Unitaria de Trabajadores dio inicio al nuevo acto eleccionario, mediante la reforma estatutaria que facultó al Consejo Directivo para su convocatoria, proceso que continuó su desarrollo hasta el 11 de abril de 2017, fecha en que fue decretada su suspensión y que motivó, después de transcurridos siete meses desde el inicio de los procesos Rol N°4579/2016 y N°4580/2016, la comparecencia de la señora Figueroa Sandoval para allanarse pura y simplemente a los reclamos interpuestos.

11° Que este tardío reconocimiento, sin embargo, sólo persiguió poner fin al juicio pendiente y obtener el alzamiento de la suspensión decretada, para proseguir con el proceso eleccionario antes iniciado, haciendo caso omiso de la sentencia pronunciada el 11 de mayo de 2017, que declaró nula la elección de 25 de agosto de 2016 y ordenó la realización de un nuevo acto eleccionario, el que, naturalmente, debería tener lugar una vez ejecutoriado dicho fallo, siendo éste y no otro, el motivo que justificó dejar sin efecto la medida de suspensión, que afectaba no sólo a la convocatoria de 20 de abril de 2017, sino a cualquiera otra convocatoria



a elección, con lo que la organización estaría impedida de cumplir la sentencia dictada. Así, la resolución antedicha dispuso comunicar "...a la Dirección del Trabajo que la suspensión decretada el 11 de abril de 2017, respecto del acto eleccionario programado para el jueves 20 de abril de 2017 y que también afectó a la convocatoria de cualquier otro acto eleccionario de la Central Unitaria de Trabajadores, ha quedado sin efecto, *en razón de haberse dictado sentencia definitiva que declaró nula la elección de 25 de agosto de 2016.*"

Corroborando lo dicho, lo expresado por el Colegio Electoral Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores en comunicados agregados a fs.765 y fs.768, en los que informa a las organizaciones afiliadas la suspensión del acto eleccionario programado para el 20 de abril de 2017 y manifiesta su decidida intención de proseguir con dicho proceso, mediante la interposición de un recurso destinado a diferir los efectos de esa resolución, decisión posteriormente revertida, pero en cuyos términos se mantiene la voluntad de posponer la elección y obtener una nueva fecha para su realización, pese a reconocer que aún no existía un pronunciamiento de este Tribunal respecto de las irregularidades vividas en el proceso electoral de 25 de agosto de 2016.

Asimismo y, una vez pronunciada la sentencia definitiva, en comunicado público de 12 de mayo de 2017, a fs.769, suscrito por la Presidenta y por el Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, la organización, interpretando lo resuelto, explica que: "La sentencia ratifica lo que esta conducción de la Central ha venido sosteniendo desde el mismo día de la fallida elección, tanto a través de tribunales como a través de los medios de comunicación: que existiendo irregularidades que solo podían ser corregidas mediante la realización de un nuevo acto eleccionario y con las garantías de transparencia establecidas por nuestro congreso nacional, a fin de evitar los ya conocidos problemas acontecidos en la elección de agosto de 2016.". A continuación, se atribuye al fallo una suerte de carácter confirmatorio de lo actuado por la Central, en cuanto a lo decidido por ésta, de convocar al proceso eleccionario de 20 de abril de 2017, sugiriendo que lo resuelto habría estado motivado por el reconocimiento judicial de las irregularidades que existieron (allanamiento). Lo propio se señala en Comunicado del Colegio Electoral Nacional, a fs.770, el que agrega que la suspensión decretada por este Tribunal sólo vino a interrumpir el proceso de elección de la Directiva Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, ya iniciado.

12° Que de estos comunicados, que fueron públicos y también dirigidos a las organizaciones sindicales afiliadas a la Central, además de advertir los perjudiciales efectos que pudieron tener en cuanto dice relación con la transparencia y la veracidad de los antecedentes que debe sustentar todo proceso eleccionario, que redundan no sólo en la participación de los electores, sino en la participación informada de los mismos, este Tribunal Electoral observa que ellos

dan cuenta de una voluntad persistente de incumplir las resoluciones recaídas en un proceso legalmente iniciado, mediante interpretaciones antojadizas, carentes de fundamento, que pretendieron justificar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico vigente.

Así, la ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, dispone en su artículo 25 que el fallo del Tribunal indicará con precisión el estado en que queda el proceso eleccionario o la situación de la materia a que se haya referido el reclamo. Por su parte, el inciso quinto del artículo 27 de la misma ley, dispone que una vez ejecutoriado el fallo, el Tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo resuelto, pudiendo incluso requerir directamente el auxilio de la fuerza pública. Agrega la señalada disposición que el que quebrante lo ordenado cumplir será responsable del delito desacato y será sancionado con la pena contemplada en el inciso primero del artículo 262 del Código Penal.

13° Que, en la especie, este Tribunal Electoral por sentencia firme de 11 de mayo de 2017, precisó el estado en que quedó el proceso eleccionario impugnado al declarar su nulidad y ordenó a la Central Unitaria de Trabajadores proceder a la realización de un nuevo acto eleccionario, con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias que le fueren aplicables.

Lo resuelto, que incidió en un proceso de reclamación deducido contra el acto eleccionario de 25 de agosto de 2016 efectuado por la Central Unitaria de Trabajadores, que comprendió la elección del Consejo Directivo Nacional y de los Consejos Territoriales, Provinciales y Zonales, no puede sino entenderse referido a la obligación de efectuar nuevamente y en forma completa, ese acto eleccionario declarado nulo, deber al que quedó obligada la Central desde que la sentencia que lo ordenó quedó firme, cuestión, por lo demás, que fue resuelta en su oportunidad al pronunciarse este Tribunal sobre un recurso de aclaración planteado en los autos Rol N° 4579/2016 y N° 4580/2016, debiendo, por tanto, desecharse cualquier interpretación que pretenda alguna especie de autorización de cumplimiento parcial, es decir que el fallo sólo se entienda referido a la elección de alguno de los órganos que contempla el estatuto -procedimiento que, además, transgrede lo dispuesto en su artículo 40-, ni menos un análisis del fallo que sugiera intención de ratificación de lo actuado por esa organización sindical con anterioridad a su dictación, sobre todo en circunstancias que, por resolución de 11 de abril de 2017, ya se había advertido a la Central Unitaria de Trabajadores la gravedad de su proceder al convocar al acto eleccionario de 20 de abril de 2017 y de privar, en los hechos, de efectos jurídicos a la elección de 25 de agosto de 2016, actuación que excede la autonomía que la Constitución y las leyes reconocen a los cuerpos intermedios, puesto que, como también se dijo en la aludida resolución, importaba



la atribución de autoridad o de derechos que el ordenamiento jurídico del país ha conferido expresamente a los Tribunales Electorales Regionales.

14° Que las irregularidades descritas constituyen vicios insubsanables del acto eleccionario reclamado, desde que éste fue convocado encontrándose pendiente de resolución el proceso de reclamación Roles N°4579/2016 y N°4580/2016, acumulados y llevado a efecto en abierta contravención a lo resuelto por sentencia ejecutoriada de 11 de mayo de 2017, recaída en los mencionados autos, conforme a lo antes razonado, anomalías que han influido directamente, tanto en la composición del cuerpo electoral, como en sus resultados, razones que facultan a este Tribunal Electoral a dejar sin efecto todo lo actuado y a declarar, en definitiva, su nulidad.

15° Que, atendida la nulidad que afecta a la elección reclamada, que se remonta al inicio del proceso en cuestión, se hace innecesario emitir pronunciamiento respecto de las demás alegaciones de los reclamantes, sin perjuicio de dejar establecido que, mayoritariamente, los hechos denunciados, tales como los relacionados con defectos en la convocatoria a la elección, la falta de publicidad oportuna, omisión de las distintas etapas del proceso eleccionario, falta de depuración del padrón electoral, inclusión como electores habilitados y como candidatos, de dirigentes que no tenían la calidad de tales; son consecuencia directa del incumplimiento antes señalado.

16° Que sin perjuicio de lo anterior y respecto del abultamiento en el Padrón Electoral del número de socios de las organizaciones afiliadas, es preciso dejar establecido que, como dispone el inciso undécimo del artículo 89 de los estatutos, que señala el procedimiento que debe seguir el Colegio Electoral Nacional para confeccionar el Padrón Electoral y que considera, entre otras reglas, que el número de socios de cada organización corresponderá al número de afiliados cuyas cotizaciones a la Central se encuentren efectivamente pagadas al momento del cierre del padrón, debe necesariamente tenerse en cuenta que el inciso tercero del artículo 107 de los estatutos de la Central, al referirse a la determinación del valor de ponderación de los votos, para cuyo cálculo es preciso conocer el número de afiliados de cada organización, impone al Colegio Electoral Nacional, para efectos de establecer el *número definitivo* de afiliados a la organización base, el deber de ponderar conjuntamente los siguientes tres factores, *a lo menos*: a) El informe del Departamento de Organizaciones confeccionado de conformidad con lo señalado en los estatutos; b) Los antecedentes recabados de la Dirección del Trabajo; y c) El número de afiliados cuyas cotizaciones se encuentren efectivamente pagadas.

De lo anterior, se tiene que el número definitivo de afiliados a la organización base se determina, a lo menos, en base a estos tres factores, debiendo todos ellos ser debidamente ponderados por el Colegio Electoral Nacional, sin exclusiones, puesto que ha sido el propio cuerpo estatutario el que ha impuesto al



órgano electoral la obligación de examinar no sólo los antecedentes que le proporcionan los órganos directivos, como el Departamento de Organización, a que dicha norma alude o los informes de Tesorería sobre el pago de cotizaciones, sino también los antecedentes recabados en la Dirección del Trabajo, con el fin de establecer o de determinar con la mayor precisión el verdadero número de socios con que cuentan las organizaciones afiliadas a la Central.

Así, la confección del Padrón Electoral constituye un acto complejo, que no se reduce a saber “cuánto fue lo que pagó la organización” -como se indicó en estrados-, sino que para ello deben seguirse los procedimientos estatutarios, que por propia decisión de la organización, exigen tener en consideración al efecto, los antecedentes que se recojan de la Dirección del Trabajo. Por esta razón, resulta inadmisibles lo argumentado por la reclamada, en el sentido que el Sistema de Relaciones Laborales (SIRELA) es un registro que sólo contiene datos referenciales, por cuanto, aun cuando así fuese, han sido los propios estatutos de la organización los que han establecido esta consulta obligatoria, de lo que se deriva que la Central Unitaria de Trabajadores no puede omitir dicho antecedente, como consta haberse hecho en el proceso eleccionario reclamado, conforme lo informado a este Tribunal Electoral por el señor Director Subrogante de la Dirección del Trabajo, don Rafael Pereira Lagos, mediante Oficio N°0861 de 14 de febrero de 2018, agregado a fs.1160, en el que expresa en acápite signado con la letra c), a fs.1169, que “En cuanto a su requerimiento en orden a informar si el Consejo Electoral Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores solicitó antecedentes a esa Dirección para efectos de determinar el número definitivo de afiliados a las organizaciones base, cabe informar que en lo que corresponde al proceso eleccionario en cuestión eso no se produjo.”.

17° Que al calificar la validez o precisión de la información que contiene el registro de SIRELA, debe tenerse presente, además -y como lo expuso la parte reclamante de doña Jimena Aguirre Galindo y otros-, que el Reglamento de la Ley N°20.940 que creó el Consejo Superior Laboral, contenido en el Decreto N°6 de 25 de enero de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha otorgado validez jurídica al señalado registro, al disponer en su artículo 8°, que para efectos de determinar las centrales sindicales de mayor representatividad del país que tendrán derecho a designar a tres miembros de ese Consejo Superior, el Subsecretario del Trabajo requerirá informe de la Dirección del Trabajo. Requerido dicho informe, éste fue emitido mediante Ordinario N°1635 de 13 de abril de 2017 -tenido a la vista-, y en él se concluye, *sobre la base de los antecedentes recabados a través del Sistema Informático de Relaciones Laborales -SIRELA-* que la Central Unitaria de Trabajadores es la central sindical de mayor representatividad entre las tres centrales sindicales legalmente constituidas en el país, decisión que significó que la Central Unitaria de Trabajadores designara a los tres consejeros que

representan a las centrales sindicales del país en ese Consejo, como consta de la Resolución N°03 de 13 de mayo de 2017, de la Subsecretaría del Trabajo.

Por otra parte, conviene recordar que el inciso quinto del artículo 231 del Código del Trabajo, dispone que las organizaciones sindicales deben llevar un registro actualizado de sus miembros, instrumento necesario para efectos del funcionamiento de cada organización y que debe servir de base para todas las actuaciones, tanto internas como externas en que ésta participe. Sin embargo y como ha constatado permanentemente este Tribunal Electoral, dicho instrumento, que debería existir con el carácter de oficial en cada organización, es habitualmente reemplazado por planillas de descuento de cotizaciones sindicales proporcionadas por los respectivos empleadores.

18° Que en cuanto dice relación con la vigencia de los estatutos de la Central Unitaria de Trabajadores, reformados en el mes de enero de 2017, rola en autos informe del señor Director del Trabajo Subrogante, don Rafael Pereira Lagos, contenido en Ordinario N°0861 de 14 de febrero de 2018, a fs. 1160, en el que manifiesta que los estatutos vigentes de esa organización sindical son los aprobados en el acto de reforma realizado el 27 de enero de 2017, cuyo ejemplar rola de fs.1094 a fs.1134, remitido por la Jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, doña Wendoling Silva Reyes, por Oficio N°0158 de 11 de enero de 2018, agregado a fs.1135.

Cabe señalar aquí, respecto de la alegación planteada por la parte reclamante de don Víctor Ulloa Zambrano y otros, relacionada con la regulación estatutaria de la votación que, según plantea, está concebida bajo la modalidad material del voto y no en forma electrónica o virtual, que del examen de las normas estatutarias pertinentes y en lo relativo a votaciones de carácter electoral, contenidas en los artículos 40, 109 y 110 a 116, se ha establecido que la regulación estatutaria no contempla una modalidad de voto virtual, sino que, sin lugar a dudas, una de tipo presencial o material, en que los sufragios deben emitirse en papeletas o cédulas confeccionadas por el Colegio Escrutador en la forma establecida en el artículo 109, debiendo el elector presentarse a sufragar, exhibiendo su cédula de identidad, ante una mesa de votación integrada por vocales, instalada en los locales de votación habilitados y para cuyo escrutinio se procede con las formalidades que disponen los artículos 115 y 116.

Asimismo, se ha verificado que existe una contradicción evidente entre las normas contenidas en los artículos 40 y 106 de los estatutos, con la contemplada en el artículo 116 inciso tercero, en cuanto las dos primeras permiten a los electores marcar hasta nueve preferencias en una o más listas que contenga la cédula y la tercera mencionada, dispone la nulidad de las cédulas que señalen más de dos candidatos, cuestión trascendental para la calificación de los votos en futuros



procesos electorarios, que deberá resolverse conforme a los mecanismos que los propios estatutos contemplen.

19° Respecto de la denuncia formulada por la parte de doña Jimena Aguirre Galindo y otros, relacionada con irregularidades en la acreditación de la directiva del Sindicato Nacional Interempresa Walmart y Actividades Conexas, que afectaría al candidato José Manuel Díaz Zavala, no resulta oportuno emitir un pronunciamiento, desde que los requisitos habilitantes para participar en un acto electionario, sea como elector, sea como candidato, deben verificarse en relación con las fechas que marcan las distintas etapas del proceso electionario de que se trate, en tanto que el de autos, se encuentra viciado desde su inicio.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15 y 18 a 25 de la Ley N° 18.593, **se resuelve:**

I.- Que se rechaza la tacha deducida a fs.235 contra la testigo Patricia Alejandra Galaz Gallardo, formulada a fs.738.

II.- Que se rechazan los incidentes de oposición a interrogaciones y contra interrogaciones deducidos en la audiencia de testigos, a fs.743, fs.744 y fs.746.

**III.- Que se acogen** las reclamaciones de fs.215, interpuesta por don Víctor Ulloa Zambrano y otros antes individualizados y la de fs.341, interpuesta por doña Jimena Angélica Aguirre Galindo y otros antes individualizados y, en consecuencia, se declara nula la elección efectuada en la Central Unitaria de Trabajadores el 30 de mayo de 2017, que estuvo destinada a la renovación del Consejo Directivo Nacional, debiendo la organización realizar un nuevo e íntegro acto electionario en el que se designará a la totalidad de los miembros del Consejo Directivo Nacional y de los Consejos Territoriales, Provinciales y Zonales, que contemplan los estatutos, con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias que le sean aplicables, debiendo los dirigentes electos deberán cesar de inmediato en el ejercicio de sus cargos, con la sola excepción del Presidente, Secretario General, Tesorero y Vicepresidente de Organización, quienes se mantendrán en sus cargos en carácter provisional y ejercerán las atribuciones que les competen, en todo cuanto fuere necesario para dar cumplimiento a lo ordenado.

El Consejo Electoral Nacional elegido en el Undécimo Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, celebrado los días 27 y 28 de enero de 2017, se mantendrá en sus funciones conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 89 de los estatutos; dará inicio al proceso electionario, mediante la respectiva convocatoria a elecciones generales, en el término de treinta días contado desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo ceñir su actuación a las normas estatutarias que rigen el procedimiento electoral contemplado en el Título IX de los estatutos de la Central sindical.



El Consejo Electoral Nacional confeccionará el Padrón Electoral ciñéndose a lo dispuesto en los artículos 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97 y 107 de los estatutos.

IV.- Que se condena a la reclamada al pago de las costas, por haber resultado totalmente vencida.

Notifíquese.

Remítase copia autorizada de la presente sentencia, una vez ejecutoriada, a la Dirección del Trabajo para su conocimiento.

Archívense en su oportunidad.

Roles N°5226/2017 y N°5227/2107 Acumulados.



PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MINISTROS TITULARES, DON JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO, PRESIDENTE; DON PATRICIO ROSENDE LYNCH Y DON ANTONIO BARRA ROJAS.



PATRICIA MUÑOZ BRICEÑO  
Secretaria Relatora

Notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede. Santiago, 16 de mayo de 2019.



Secretaria Relatora